

Prevención de Lavado de Activos (Ley 19.913)

- ≡ Conocimiento del Cliente
- ≡ Beneficiario Final
- ≡ Operaciones Sospechosas
- ≡ Conductas a Reportar al Oficial de Cumplimiento
- ≡ Prohibición de Divulgación del Sujeto Investigado

Conocimiento del Cliente

Según la ley 19.913 ciertas personas, ya sea naturales o jurídicas, están obligadas a informar sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. Es por lo anterior que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dicta la circular N°49 la cual señala que es deber de los sujetos obligados, que se señalarán más adelante, identificar y conocer a sus clientes, con el fin de contar con una herramienta eficaz que les permita desde un punto de vista de gestión de riesgos, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En este sentido, los sujetos obligados deben contar con un sistema de prevención de lavado o blanqueo de activos basado en el concepto de “conozca a su cliente”, que consiste en un adecuado marco de debida diligencia que les permita conocer las actividades que desarrollan, las características más relevantes de las operaciones que realizan y de los fundamentos en que éstas se apoyan.

Con relación a lo anterior la circular señala que para aquellas operaciones de más de 1.000 dólares, los sujetos obligados deben solicitar a sus clientes la siguiente documentación y antecedentes:

- i. Nombre o razón social, en el caso de las personas jurídicas se debe agregar el nombre de fantasía de la empresa, si procede.
- ii. Número de Cédula Nacional de Identidad o número de pasaporte cuando se trate de ciudadanos extranjeros. En el caso de personas jurídicas se debe solicitar el RUT o similar si es extranjera.
- iii. Profesión, ocupación u oficio en el caso de personas naturales, o giro comercial en el caso de personas jurídicas.
- iv. Número de boleta o factura emitida.
- v. Domicilio o dirección en nuestro país, o en el país de origen o de residencia.
- vi. Correo electrónico y/o teléfono de contacto.

i La información indicada debe constar en el Registro denominado “Registro Debita Diligencia y Conocimiento del Cliente” respectivo que conforme a dicha circular los obligados deben llevar, la cual puede ser solicitada en cualquier momento por la UAF. Asimismo, y en base a la información recabada en el cumplimiento de esta obligación, las personas obligadas deben generar una ficha de cliente, las que deben mantenerse actualizadas luego de cada transacción efectuada y que debe ser incluida en dicho registro.

i En el evento que el cliente se niegue a entregar todo o parte de la información indicada, dicha negativa debe ser considerada como señal de alerta a objeto de analizar el envío de un reporte de operación sospechosa a la UAF.

Por último los sujetos obligados que comercialicen bienes, productos de cualquier naturaleza o presten servicios a clientes de manera continua, esto es, que mantengan una relación comercial con el cliente que vaya más allá de una mera transacción o servicio deben generar una “ficha cliente” de cada uno de ellos, incluyendo los datos arriba indicados, la que debe ser actualizada anualmente.

Beneficiario Final

El beneficiario final según la Circular N° 57 de la Unidad de Análisis Financiero es aquella persona natural que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades y otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica o estructura jurídica determinada. Asimismo, se entiende como Beneficiario Final aquella persona natural que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismo, ejerce el control efectivo en la toma de decisiones de la persona jurídica o estructura jurídica.

En la mencionada circular se señala que corresponde a los Sujetos Obligados, en el marco del cumplimiento de la obligación de debida diligencia y conocimiento del cliente cumplir de manera íntegra y oportuna las siguientes obligaciones:

- Identificación del Beneficiario Final. Respecto de esta identificación, los Sujetos Obligados deben solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas, una declaración que contenga los datos de identificación suficientes respecto de la identidad de sus beneficiarios finales.

Para estos efectos, la UAF proveerá de un formulario base, el cual puede ser complementado con nuevos campos por los sujetos obligados, de acuerdo a las características y complejidad de los negocios que realizan. Este formulario debe ser completado de buena fe por el cliente, ya sea de manera presencial o electrónica, según la disponibilidad tecnológica con que cuente el Sujeto Obligado.

- La obligación de solicitar la información sobre el beneficiario final del cliente persona jurídica o estructura jurídica, a través de la solicitud de la declaración debe realizarse:

i. Antes o mientras se establece una relación legal o contractual de carácter permanente entre el cliente persona jurídica o estructura jurídica y el respectivo sujeto.

En el caso de transacciones ocasionales de una persona jurídica o estructura jurídica respecto de la que no se tiene una relación permanente, y esta será por un monto igual o superior a 15 mil dólares o su equivalente en pesos chilenos y otras monedas extranjeras de curso legal al momento de la operación o transacción, se debe llevar a cabo el mismo procedimiento de declaración.

Para la determinación del tipo de cambio se debe estar al valor del dólar observado del último día del mes previo a la operación o transacción correspondiente.

ii. Para el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas con quienes los sujetos obligados ya tengan una relación legal o contractual previa y permanente antes del 12 de junio de 2017, se debe llevar a cabo este procedimiento de identificación de sus beneficiarios finales a lo menos una vez al año, o en intervalos de menor tiempo si así lo estima necesario el propio sujeto obligado, sin perjuicio de lo indicado en el numeral Cuarto de la presente Circular.

Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados deben comunicar a sus clientes personas jurídicas y estructuras jurídicas con quienes se relacionen comercialmente, la obligación de informar acerca de cualquier cambio de sus beneficiarios finales.

- El procedimiento de solicitud de declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final debe ser incorporado en el respectivo Manual de Prevención de cada sujeto obligado, asegurando su oportuna difusión entre sus trabajadores en las actividades de capacitación que regularmente aquellos están obligados a realizar.
- El sujeto obligado debe tomar medidas razonables para verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica referente a su beneficiario final, pudiendo siempre solicitar al mismo cliente documentación

adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus posibilidades organizacionales y legales, la veracidad de lo declarado por el cliente.

- Los Sujetos Obligados deben incorporar como un campo adicional en la ficha del cliente y en el Registro Especial de Debita Diligencia y Conocimiento del Cliente, la información de sus clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas en que consten los datos por ellos aportados en relación a la identidad de los beneficiarios finales. Esta información debe estar siempre a disposición de las autoridades competentes.
- En caso que el cliente persona jurídica o estructura jurídica declare como beneficiario final a una personas expuesta políticamente, o bien así se determine por el sujeto obligado en el proceso de previsión y verificación de la información, se debe igualmente implementar y ejecutar respecto del cliente todas las medidas de debita diligencia y conocimiento del cliente previstas en la circular N°49 señalada o la normativa aplicable en la materia.
- En el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras, el sujeto obligado debe requerir la identidad y domicilio de la persona natural relevante que ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencial en el extranjero y de sus representantes legales domiciliados en Chile, obligando a estos a entregar en un plazo no mayor a 45 días hábiles toda la información sobre beneficiarios finales de dichas personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras.
- En caso de dilación injustificada o negativa del cliente persona jurídica o estructura jurídica en proporcionar la información y/o documentación requerida para identificar a sus beneficiarios finales, los sujetos obligados deben considera dicha conducta como señal de alerta para el envío de un reporte de operación sospechosa a la UAF.

- i** Sin perjuicio de lo anterior, y como parte de las medidas de administración y mitigación de riesgos de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados, estos pueden considerar abstenerse de establecer o mantener la relación de negocio o de ejecutar una o más operaciones en los casos del inciso anterior, siempre que sus respectivas regulaciones legales así lo permitan.

Operaciones Sospechosas

Según la ley 19.913 ciertas personas, ya sea naturales o jurídicas, están obligadas a informar sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, dentro de las cuales se encuentran:

- 1** Los bancos e instituciones financieras.
- 2** Las empresas de arrendamiento financiero.
- 3** Las empresas de securitización.
- 4** Las administradoras generales de fondos, los administradores de fondos mutuos y las sociedades que administren fondos de inversión privados.
- 5** Las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté sujeta a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero.

- 6 Los corredores de bolsa y los agentes de valores.
- 7 Las administradoras de fondos de pensiones.
- 8 Las empresas de depósito de valores regidas por la ley No 18.876.

Son operaciones sospechosas: todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8o de la ley No 18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada. Dicho artículo sanciona al que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en dicha ley.

Corresponde a la Unidad de Análisis Financiero señalar a las entidades ya mencionadas, las situaciones que especialmente deben considerar como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas, en sus respectivos casos.

Para los efectos de esta obligación, las personas indicadas deben designar un funcionario responsable de relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero.

Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o actividades no impiden el cumplimiento de la obligación de informar establecida en el presente artículo. Lo anterior es también aplicable si la Unidad solicita la entrega o exhibición de los antecedentes que el sujeto obligado tuvo en consideración para reportar la operación sospechosa.

Este deber de informar es también exigible a todo aquel que porte o transporte moneda en efectivo o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los diez mil dólares o su equivalente en otras monedas. En estos casos, la información

es recabada directamente por el Servicio Nacional de Aduanas y remitida por éste a la Unidad de Análisis Financiero.

Las personas señaladas en la ley 19.913 deben además mantener registros especiales por el plazo mínimo de cinco años, e informar a la Unidad de Análisis Financiero cuando ésta lo requiera, de toda operación en efectivo superior a diez mil dólares o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación.

Para quienes están obligados a proporcionar la información señalada a la Unidad de Análisis Financiero se las sanciona con presidio menor en sus grados medio a máximo (es decir de 541 días a 5 años) y multa de cien a cuatrocientas UTM si maliciosamente destruyen, alteran u ocultan los antecedentes o documentos que deben entregar, o entregan antecedentes o documentos falsos.

Conductas a Reportar al Oficial de Cumplimiento

La ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en su artículo 3 señala que los Sujetos Obligados deben designar un funcionario responsable de relacionarse con la UAF, el cual según la Circular N°49 se denomina “Oficial de Cumplimiento” el cual tiene por función principal la coordinación de las políticas y procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas, como asimismo, responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicha ley y circulares emitidas por la UAF.

El Oficial de Cumplimiento debe ostentar un cargo de alta responsabilidad dentro de la empresa, tales como gerente de área o división, a objeto de que asegure una debida independencia en el ejercicio de su labor, siendo obligación del Sujeto Obligado proveer a éste de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para cumplir con su misión.

A este funcionario, como intermediario con la UAF, se le deben efectuar tres reportes:

Reporte Operaciones Sospechosas (ROS)

Son operaciones sospechosas: todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8o de la ley No 18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada. Dicho artículo sanciona al que por cualquier medio, directa o indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en dicha ley.

Reporte Operaciones en Efectivo (ROE)

Se consideran “operaciones en efectivo” aquellas en las que el medio de pago o de cobro sea papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos mercantiles

Reporte Negativos de Operaciones en Efectivo (ROE Negativo)

En los casos en que durante el ejercicio no se registren operaciones en efectivo superiores a USD 10.000, las entidades supervisadas o sujetos obligados deben informar a la UAF un Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo.

Prohibición de Divulgación del Sujeto Investigado

Se prohíbe informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto, a:

- a) Las personas e instituciones que tienen el deber de informar las operaciones sospechosas o inusuales conforme a la ley 19.913.
- b) Las mismas personas señaladas cuando sean requeridas para otorgar los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente reportada a la Unidad de Análisis Financiero o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y los que deba recabar para intercambiar información con sus similares en el extranjero. Las personas requeridas están obligadas a proporcionar la información solicitada, en el término que se les fije.
- c) las personas que presten servicios a cualquier título a las personas e instituciones aludidas en el inciso anterior, que hayan tenido conocimiento de la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero.



La infracción a esta prohibición es castigada con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (es decir de 541 días a 5 años) y multa de cien a cuatrocientas UTM.